

Las movilizaciones sociales durante el gobierno de Iván Duque. Colombia, 2018- 2022

Social mobilizations during the Government of Iván Duque. Colombia, 2018-2022

Edwin Cruz-Rodríguez

Politólogo de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, doctor en estudios políticos de la misma institución. ORCID-ID: <http://orcid.org/0000-0001-8891-8796> Correo electrónico: ecruzr@unal.edu.co

Fecha de recepción: 1 de septiembre de 2022 **Fecha de aceptación:** 15 de octubre de 2022

Resumen

Este artículo analiza las movilizaciones sociales durante el gobierno Duque (2018-2022) en Colombia. Sostiene que estas grandes acciones colectivas hacen parte de un mismo ciclo de protesta y se explican por factores del contexto político en que se desarrollan. En este escenario se producen dos procesos definitivos: la emergencia de demandas acalladas por la guerra gracias a las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos (2010-2018) y las FARC, y el declive de la hegemonía uribista en la conducción del Estado. Estos procesos alteran las dinámicas de la política institucional, la representación política y las coaliciones. Así, la crisis socioeconómica es un factor necesario pero insuficiente para explicar las movilizaciones. A pesar de los costos que acarreó una alta represión de la protesta, la ciudadanía optó por movilizarse porque no tuvo a disposición ningún otro canal para tramitar las demandas sociales emergentes, no representadas por la derecha uribista, el centro ni la izquierda política.

Palabras clave: Colombia; movilizaciones sociales; protesta; paro; Iván Duque.

Abstract

This article analyzes social mobilizations during the government of Iván Duque (2018-2022) in Colombia. He maintains that these great collective actions are part of the same protest cycle and are explained by factors of the political context in which they develop. In this scenario there are two definitive processes: the emergence of demands, previously silenced by the war, thanks to the peace negotiations between the Government of Santos (2010-2018) and FARC, and the decline of the uribista hegemony in the conduction of the State. These processes alter the dynamics of

institutional policy, political representation and coalitions. Thus, the socioeconomic crisis is a necessary but insufficient factor to explain the mobilizations. Despite the costs that a high repression of the protest brought, citizens chose to mobilize because no other channel had available to process emerging social demands, not represented by the Uribista right, the center or the political left.

Keywords: Colombia; social mobilizations; protest; strike; Iván Duque.

Introducción

Entre 2012 y 2022 se han producido las más grandes movilizaciones sociales en la historia reciente de Colombia. Se trata de fenómenos masivos de acción colectiva sostenidos en el tiempo. Una movilización comprende varios eventos contenciosos o protestas, tal como las entiende, por ejemplo, el Centro de Investigación y Acción Popular (CINEP), cuya base de datos sobre protestas sociales contabiliza acciones de más de diez personas que expresan sus reivindicaciones en el ámbito público, ante al Estado o entidades privadas (Archila, 2002, p. 77). Tanto las protestas como las movilizaciones pueden originarse en las dinámicas propias de un movimiento social, siendo convocadas por una organización especializada en la promoción de la acción colectiva, o generarse de manera más o menos espontánea. Pero, a diferencia de las protestas y las movilizaciones, el movimiento social se caracteriza por su persistencia en el tiempo (Godás, 2007, p. 20).

Las grandes movilizaciones comenzaron en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018). Inicialmente, fueron acciones predominantemente sectoriales de grandes magnitudes, con demandas claramente formuladas en pliegos de peticiones y alta persistencia en el tiempo, como el paro nacional universitario (octubre de 2011), el paro nacional cafetero (febrero-marzo de 2013), el paro campesino del Catatumbo (junio-julio de 2013), los paros agrarios nacionales (agosto de 2013, abril-mayo de 2014) o la Minga indígena, campesina, étnica y popular (mayo-junio de 2016) (Cruz, 2017). Durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) las movilizaciones parecían continuar con la misma dinámica sectorial. Así sucedió con el paro nacional universitario (octubre-noviembre de 2018).

Sin embargo, el paro nacional de noviembre y diciembre de 2019, las protestas sociales en medio de la crisis pandémica a lo largo de 2020 y el paro nacional de 2021 rompieron con la lógica sectorial. Estas acciones también tuvieron participaciones masivas y paralizaron partes considerables del país durante semanas o meses. No obstante, a diferencia de las anteriores, no fueron fundamentalmente sectoriales, sino transversales. Si bien los paros realizados en el gobierno Duque fueron convocados por el Comité Nacional de Paro (CNP), que agrupa organizaciones sociales formales, contaron con iniciativas autónomas, grupos de ciudadanos que convocaron por sí mismos las acciones colectivas y que incluso llegaron a cuestionar la representatividad de las organizaciones sectoriales en el CNP¹. Así mismo, mientras las demandas de las movilizaciones sectoriales fueron articuladas en pliegos de peticiones, las movilizaciones transversales se caracterizaron por la irrupción de una multiplicidad de reivindicaciones que en la práctica no pudieron ser articuladas por los pliegos presentados por el CNP. En fin, mientras las movilizaciones

¹ Forman parte del CNP: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), la Confederación de Pensionados de Colombia (CPC), la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Cruzada Camionera, Dignidad Agropecuaria, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) y la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES).

antecedentes comprometieron la participación de determinados sectores sociales, estas fueron intersectoriales e interclastas, articulando a actores de clase media y media alta, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados y, mayoritariamente, jóvenes.

En el debate público, el paro de 2021, desenlace de las movilizaciones, se ha concebido como un “estallido social”, producto de la crisis socioeconómica ocasionada por la pandemia y las deficientes políticas implementadas por el gobierno. Esta explicación parte de una concepción espasmódica de la protesta, concebida como respuesta a la privación de bienes y servicios, similar a aquella que criticó Edward P. Thompson (1995) en sus estudios sobre los motines de subsistencia en la Inglaterra del siglo XVIII. Omite así la vinculación del paro con las movilizaciones anteriores y el contexto en que estas se inscriben.

Probablemente, esa concepción se explica porque las características de las movilizaciones transversales durante el gobierno de Duque parecen romper con las teorías predominantes, según las cuales la acción colectiva es más probable cuando los actores cuentan con sólidas estructuras de movilización u organizaciones, que ponen a disposición de los participantes los recursos – materiales, cognitivos, simbólicos, etc.– necesarios para la protesta, y marcos de acción colectiva o discursos eficaces para articular en forma coherente y dotar de sentido un conjunto de demandas sociales (McAdam, 1999). En efecto, como se ha dicho, tales movilizaciones no se gestaron en lo fundamental desde las organizaciones de los movimientos sociales, sino que involucraron redes de relaciones sociales de la vida cotidiana más amplias, ni tuvieron discursos o marcos de acción colectiva claramente formulados, sino un variopinto conjunto de demandas que ni siquiera se articularon en los pliegos de peticiones del CNP.

Este trabajo examina los mecanismos sociopolíticos que explican la acción colectiva, incluso en ausencia de estructuras de movilización sólidas y marcos de acción colectiva eficaces. Sostiene que la situación socioeconómica es un factor necesario pero insuficiente para explicar las movilizaciones². Pese a las diferencias anotadas entre las movilizaciones sectoriales y las movilizaciones transversales, todas se desarrollan en un contexto similar, lo que justifica concebirlas como parte de un mismo ciclo. Este contexto se estructura por dos grandes procesos que crean oportunidades políticas para las movilizaciones, a pesar de la alta represión estatal que operó sobre cada una de ellas, en una dinámica de progresivo desborde de las organizaciones sociales y de politización creciente de relaciones sociales cotidianas, que define las características singulares de las movilizaciones durante el gobierno Duque.

De un lado, las negociaciones con la insurgencia armada y el Acuerdo de paz (2016) favorecen la irrupción de demandas sociales aplazadas o invisibilizadas por la guerra, orientadas a la resolución de las problemáticas estructurales que cíclicamente han producido violencia política, como las crecientes pobreza y desigualdad social, el modelo de desarrollo económico orientado a apuntalar privilegios de clase, la concentración de la propiedad de la tierra o el genocidio político

² Los efectos de la delicada situación socioeconómica, sobre todo después de la pandemia, sobre el descontento social, son innegables. En abril de 2021, el Departamento Nacional de Estadística (DANE) reveló que la pobreza monetaria había llegado al 42,5% incrementándose en 6,8 puntos porcentuales desde 2019, cuando era de un 35,7%. “Pandemia hizo subir la pobreza al 42,5 % en 2020”. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/dane-publico-cifras-de-la-pobreza-monetaria-en-colombia-584732>. Así mismo, en octubre de 2021, un informe del Banco Mundial situó a Colombia como el país más desigual de la OCDE, con un coeficiente de Gini de 0,53, ocupando además el segundo lugar en la región y siendo uno de los países más desiguales a nivel global. “Colombia, el segundo país más desigual en América Latina”. Disponible en: <https://www.portafolio.co/economia/gobierno/colombia-es-el-segundo-pais-mas-desigual-de-america-latina-segun-el-banco-mundial-557830>. Estas situaciones afectan sobre todo a la población joven, el 68,3% de la población del país se ubica en el rango de edades entre 15 y 64 años, que sin importar su origen social tiende a ver frustradas sus expectativas de realización en los campos educativo y laboral.

como mecanismo de exclusión, entre otros. De otro lado, el declive de la hegemonía del uribismo, que condujo el Estado en las últimas dos décadas, produjo un realineamiento de las distintas fuerzas políticas, la disolución y la formación de coaliciones, así como transformaciones en las dinámicas de la representación política. Como consecuencia, las demandas emergentes chocan con un sistema institucional cerrado y con la incapacidad de la derecha, el “centro” y la izquierda para representarlas políticamente, lo que deja como única alternativa de trámite la protesta social, a pesar de sus altos costos en términos de represión.

Para desarrollar este argumento, en primer lugar, se reconstruyen someramente las movilizaciones, caracterizando sus repertorios, marcos de acción colectiva y estructuras de movilización. Seguidamente, se examina el contexto político que, en parte, explica las acciones colectivas.

1. Política contenciosa

Las grandes movilizaciones durante el gobierno Duque plantearon una “contienda política”³, caracterizada por el tránsito desde las acciones colectivas sectoriales hacia manifestaciones transversales, apoyadas en estructuras de movilización basadas en redes de relaciones sociales de la vida cotidiana y con una gran dificultad para articular las demandas ciudadanas emergentes en marcos de acción colectiva eficaces. Las estrategias del gobierno, por su parte, oscilaron entre la dilación y la intensificación de la criminalización y la represión de la protesta social.

1.1. El paro universitario (octubre-noviembre de 2018)

Un gran paro nacional universitario se desarrolló entre el 11 de octubre y el 16 de noviembre de 2018. Las grandes manifestaciones iniciaron el 10 de octubre con una multitudinaria “Marcha por la educación superior en Colombia”. Al día siguiente se anunció el paro nacional en las 32 universidades públicas. El gobierno Nacional, en cabeza del presidente Duque y de la ministra de Educación María Victoria Angulo, trató de desactivar la movilización convocando a los rectores a una negociación. El 23 de octubre se anunció un acuerdo entre gobierno y rectores con el fin de adicionar en los 4 años siguientes unos recursos a las universidades, que desde la perspectiva de los estudiantes eran insuficientes para paliar el déficit acumulado e incluso para garantizar el funcionamiento de las instituciones en lo que restaba del año. Tal déficit se retrotrae a los criterios fijados por la Ley 30 de 1992 para las transferencias presupuestales, que no se ajustan al crecimiento de las universidades en número de estudiantes, plantas docentes e infraestructura.

Frente al acuerdo entre el gobierno y los rectores, el 31 de octubre los estudiantes realizaron la “Marcha Zombie” en varias ciudades. Posteriormente, se abrió una mesa de negociación entre el gobierno y los representantes estudiantiles, que se frustró por la resistencia del gobierno a ceder. En las jornadas del 8 de noviembre, en Bogotá, las movilizaciones se dirigieron hacia el norte de la ciudad, en vez de concentrarse como es tradición en la Plaza de Bolívar, lo que ocasionó atascamientos y enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. El 15 de noviembre se desarrolló en distintas ciudades la “Marcha de los libros y los lápices” con el fin de presionar al gobierno a retomar la mesa de negociaciones con el estudiantado, que exigía la presencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Finalmente, el 14 de diciembre gobierno y

³ Este concepto hace referencia a “la interacción episódica, pública y colectiva entre los reivindicadores y sus objetos cuando: (a) al menos un gobierno es uno de los reivindicadores y (b) las reivindicaciones, en caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de al menos uno de los reivindicadores” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2005, p. 5).

organizaciones estudiantiles llegaron a un acuerdo para mitigar el déficit presupuestal de las universidades⁴.

En rigor, esta movilización comparte las características del ciclo de protesta precedente, pues sus actores protagónicos y sus reivindicaciones fueron claramente sectoriales. Las *estructuras de movilización* fueron organizaciones formales cuya principal finalidad es promover la acción colectiva en función de las demandas del estudiantado⁵. El paro se sustentó en las organizaciones estudiantiles aglutinadas en torno a la Unión Nación de Estudiantes de Educación Superior (UNEES), la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (ACREES) y la Federación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (FENARES). También contó con el apoyo de los sindicatos de docentes, como la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU).

Así mismo, el *marco de acción colectiva* fue sectorial⁶. El movimiento estudiantil enmarcó su lucha en una consigna básica: la educación como un derecho y no como una mercancía, tal como lo venía haciendo desde las protestas de 2011 (Cruz, 2012). En su perspectiva, el problema es la subordinación de la educación a los criterios mercantiles, que lleva al gobierno a privilegiar estrategias como los créditos para educación superior en el Icetex o los subsidios a la demanda bajo la modalidad de créditos-beca, como el programa “Ser pilo paga”. Para el movimiento estudiantil, por el contrario, el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar el derecho a la educación superior y la mejor manera de hacerlo es financiando adecuadamente a las universidades públicas, en vez de continuar restringiendo año a año sus ingresos y aumentando su déficit. Por esa razón, el marco de acción colectiva del movimiento estudiantil vinculó demandas amplias, como la reforma del Icetex y la terminación de “Ser pilo paga”, que contribuyeron a articular estudiantes de universidades privadas afectados por el endeudamiento.

1.2. El paro nacional (noviembre diciembre de 2019)

El 21 de noviembre de 2019 hubo multitudinarias manifestaciones en distintas ciudades, en respuesta a un paro nacional convocado casi un mes antes por el CNP, que reúne a las centrales obreras entre otras organizaciones sociales. Por su magnitud, la vinculación de la clase media y media alta en ciudades, la protesta fue comparada con el mítico paro cívico nacional del 14 de septiembre de 1977. La enorme acogida que tuvo la convocatoria del paro en parte se debió a la torpeza del gobierno, cuyo esfuerzo por desactivar la protesta asociándola a un supuesto intento de desestabilización que comprometía “vándalos” que supuestamente ingresaban al país como parte de un complot internacional, generó un gran descontento gestado durante cerca de un mes. La

⁴ “Gobierno y líderes universitarios logran acuerdo para levantar el paro estudiantil”. Disponible en: <https://noticias.caracoltv.com/colombia/gobierno-y-lideres-universitarios-logran-acuerdo-para-levantar-el-paro-estudiantil>

⁵ Las estructuras de movilización designan “canales colectivos tanto formales como informales, a través de los cuales la gente puede movilizarse e implicarse en la acción colectiva” (McAdam, Mc-Carthy y Zald, 1999, p. 25). Por lo general, los movimientos sociales cuentan con organizaciones formales enfocadas en perseguir, mediante distintos repertorios de acción, sus objetivos colectivos. Sin embargo, no solo este tipo de organizaciones forman estructuras de movilización. Cuando las movilizaciones son masivas, politizan redes de relaciones sociales que no tienen fines políticos y cuya función no es la movilización pero que pueden generarla en determinadas coyunturas, como familias, redes de amigos, asociaciones ciudadanas, etc. (McCarthy, 1999, p. 206).

⁶ Los marcos de acción colectiva son “significados compartidos que impulsan a las personas a la acción colectiva” (Tarrow, 1997, p. 57). Son esquemas mentales cuyo objetivo es “forjar formas compartidas de considerar el mundo y a sí mismos que legitimen y muevan a la acción colectiva” (McAdam, McCarthy y Zald, 1999, p. 27). Tales esquemas articulan un diagnóstico de los problemas socialmente relevantes, delimitan la identidad de los manifestantes y de los responsables del problema, y proponen un deber ser hacia el que se orienta la acción colectiva (Rivas, 1998, p. 207).

respuesta social fue a contrapelo de lo que esperaba el gobierno. En lugar de conseguir que la sociedad colombiana rechazara la protesta, intensificó la desconfianza en la capacidad de gestión del gobierno. Cerca de la fecha de inicio de la protesta, personalidades ajenas a la política, entre ellos cantantes y una reina de belleza, apoyaron públicamente el paro. El gobierno procedió entonces a allanar las sedes de varias organizaciones sociales y ordenar la detención de activistas, en un último intento por conjurar la manifestación.

La masiva participación de jóvenes, estudiantes, mujeres, ambientalistas, desempleados, desbordó las organizaciones convocantes del paro. Por consiguiente, se politizaron redes de relaciones sociales de la vida cotidiana, familias, grupos de amigos, compañeros de trabajo o de estudio, vecinos, estructuras que no tienen por fin la movilización social pero que en esa coyuntura fueron fundamentales para sustentarla. De hecho, muchas de las acciones colectivas que comprendió el paro fueron “autoconvocadas” y descentralizadas, propuestas por los actores directamente participantes, al margen del CNP. Por ejemplo, en Bogotá parte de los manifestantes emularon al movimiento universitario del año precedente y difundieron la acción colectiva por toda la ciudad, no solo en la Plaza de Bolívar. Espontáneamente se retomaron repertorios de acción colectiva como el cacerolazo, usado ocasionalmente en el marco del paro agrario de 2013 pero acogido masivamente la noche del 21 de noviembre.

Así mismo, el marco de acción colectiva rebasó las demandas iniciales, de cuño sectorial, que apuntaban a evitar lo que en el momento se denominó el “paquetazo”, una iniciativa del gobierno para sacar adelante las reformas tributaria, laboral y pensional, todas con una marcada orientación regresiva y neoliberal. En el desarrollo de las protestas se adicionó una multiplicidad de reivindicaciones transversales, no solo sectoriales, que expresaban el creciente descontento social con el gobierno Duque y en la práctica no lograron ser articuladas por el pliego de peticiones del CNP. Muchas de esas demandas, en particular las referidas al cambio en el modelo de desarrollo, la garantía de derechos básicos como el trabajo, la educación o la salud, y la protección de los líderes sociales y a los excombatientes (más de 500 y cerca de 300 asesinados), podrían articularse en la exigencia de implementar el Acuerdo de Paz con las Farc, pero en la práctica el descontento que expresaban careció de un marco de acción colectiva coherente, es decir, con la clara identificación de un problema socialmente relevante, sus responsables y sus posibles soluciones.

1.3. Las protestas en la crisis pandémica (2020)

Las protestas persistieron en el mes de diciembre de 2019, pero en 2020 se moderó su ímpetu. Hubo varios intentos de diálogo frustrados entre el gobierno y el CNP, acompañadas de convocatorias a nuevas jornadas de movilización, el 21 de enero y el 21 de febrero. No obstante, estas no alcanzaron el carácter masivo, no fueron tan intensas como las del año anterior. Finalmente, para el 25 de marzo se convocó otra jornada que no pudo desarrollarse debido al comienzo de la crisis pandémica. El temor generalizado al contagio, por una parte, y las disposiciones de confinamiento del gobierno, por otra, terminaron por interrumpir la dinámica del paro.

En los meses posteriores hubo manifestaciones en distintas ciudades en rechazo a las políticas de los gobiernos nacional y locales para atender la crisis, como los confinamientos que no garantizaban la asistencia social necesaria para que la ciudadanía pudiera enfrentar la cuarentena. Sin embargo, estas protestas no consiguieron articularse en grandes movilizaciones con permanencia en el tiempo, debido a las restricciones a la cotidianidad impuestas por la crisis pandémica y las medidas del gobierno, que limitaron las relaciones sociales y la movilidad de la población. En varias ocasiones se implementaron repertorios de protesta distintos a la toma de las

calles, como el cacerolazo, que podía desarrollarse desde las viviendas, sin que se tuviera el mismo impacto.

El confinamiento obligatorio a causa de la pandemia estuvo vigente entre marzo y agosto de 2020. En esos meses se presentaron algunas protestas en ciudades como Cali y Bogotá (abril) en demanda de medidas económicas para solventar la cuarentena. El 7 de septiembre se realizó una caravana, que pretendía retomar las protestas del año anterior, contra las políticas del gobierno nacional en medio de la pandemia. Unos días más tarde hubo una oscura jornada de protesta y una gran represión en Bogotá: el 8 de septiembre en un centro policial de la localidad de Engativá, en Bogotá, fue asesinado el abogado Javier Ordóñez. El hecho se hizo público mediante un video que se difundió ampliamente en las redes sociales virtuales, lo que desató una oleada de airadas protestas contra la Policía en distintos lugares de la Capital. Un mes más tarde, el 10 de octubre, en el Cauca inició una minga del pueblo Nasa que, por la negativa del presidente Duque a acceder al diálogo planteado en la ciudad de Cali, decidió marchar a Bogotá para unirse a las nuevas jornadas de paro convocadas el 19 y 21 del mismo mes.

En fin, aunque la crisis socioeconómica y las medidas para atender la pandemia redujeron las posibilidades de desarrollar grandes movilizaciones, hubo protestas importantes en los meses del confinamiento. No obstante, estas protestas no consiguieron articularse en términos organizativos, con estructuras de movilización perdurables, ni discursivos, con un marco de acción colectiva que comprendiera sus distintas demandas. Por esa razón, entre otras cosas, tuvieron muchas dificultades para salir del marco de sentido sobre la crisis pandémica impuesto por el gobierno, de acuerdo con el cual los problemas socioeconómicos que acarrearaba eran tratados como consecuencias inevitables de una tragedia sanitaria, las soluciones se limitaban a la medicina, particularmente a la vacunación, y se enfatizó el “autocuidado” individual sobre la responsabilidad social y estatal, en particular para mejorar los servicios de salud, subordinados a un modelo de negocio privado.

1.4. El paro nacional de 2021

El 4 de abril de 2021, el CNP convocó una jornada de paro nacional para el día 28 de ese mes. Su objetivo inicial era exigir el retiro de la reforma tributaria propuesta por el gobierno Duque, que gravaba productos de la canasta familiar, afectando considerablemente a las clases media y baja. Unos días antes, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había tratado de legitimar la medida asignándole un precio irrisorio, muy por debajo del precio del mercado, a los huevos, lo que generó profunda indignación. El gobierno nacional trató de conjurar la manifestación afirmando nuevamente que se trataba de una conspiración internacional para desestabilizar políticamente al país, liderada incluso por el entonces excandidato presidencial Gustavo Petro. Por esa razón, una de sus acciones el día previsto para la manifestación fue cerrar las fronteras con Ecuador y Venezuela. Las protestas fueron masivas, sobre todo en las ciudades capitales y, muy especialmente, en Bogotá y Cali, donde se situaron los principales núcleos de la movilización. La desmedida represión policial en lugar de reducirlas les infundió mayor vigor. En los días posteriores se desarrollarían múltiples manifestaciones de descontento, la mayoría de las veces autoconvocadas por la propia ciudadanía.

Se usaron todos los repertorios tradicionales e incluso se innovó en formas de protesta: bloqueos a vías públicas, marchas, campamentos, derribo de estatuas y monumentos, batucadas, danzas, asambleas populares al aire libre, e incluso la construcción de monumentos a los ciudadanos asesinados por la fuerza pública y por paramilitares urbanos en medio del paro, como el Monumento a la resistencia, inaugurado el 13 de junio en Cali. El ritmo de las protestas fue sostenido y prácticamente ininterrumpido en los meses siguientes y hasta agosto, pero en algunos

lugares, como Puerto Resistencia en Cali, el Portal de la Resistencia al occidente de Bogotá y el Puente de la Resistencia en la localidad de Usme, persistieron hasta fines de año. Incluso posteriormente en estas localidades hubo protestas periódicas, generalmente los días 28 de cada mes, para conmemorar el paro.

El gobierno trató en todo el tiempo de dilatar las negociaciones con el CNP y a partir del 13 de junio empezó a desarrollar encuentros regionales con los manifestantes. Sin embargo, las protestas consiguieron el retiro de la reforma tributaria por parte del gobierno y la dimisión de la canciller, Claudia Blum, el 2 de mayo; la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el 3 de mayo; el retiro de la reforma del sector salud, el 19 de mayo; y la renuncia del comisionado de paz, Miguel Ceballos, que llevaba las conversaciones con el CNP, el 23 de mayo. Sin embargo, y pese a los procesos de autoorganización social agenciados en los lugares de más intensa movilización, las protestas paulatinamente fueron perdiendo el ímpetu inicial.

En esta inmensa movilización se intensificó la tendencia del paro de fines de 2019 en lo que a estructuras de movilización se refiere. Aunque el paro fue convocado por las centrales obreras en el marco del CNP, lo que se produjo fue una inmensa politización de formas de sociabilidad y redes de relaciones sociales de la vida cotidiana no necesariamente orientadas a la acción colectiva ni a la participación política, como las familias, los grupos de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. Se trata de un fenómeno similar al que estudia Zibechi (2006), quien sostiene que en los momentos de insurrección las instituciones u organizaciones formales de los movimientos sociales se disuelven y la acción colectiva pasa a sostenerse en los lazos comunitarios primarios. Esta dinámica fue mucho más marcada en lugares como “Puerto resistencia”, en Cali, o en el Portal de la Resistencia, en Bogotá. En estos lugares las protestas y las demás formas de acción colectiva necesarias para la movilización —asambleas, ollas comunitarias, campañas de información y sensibilización, etc.— corrieron por cuenta, en primer lugar, de jóvenes que se vincularon a ellas de forma más o menos espontánea y que en el curso de la propia movilización generaron procesos organizativos como los de las Primeras Líneas. Estas estructuras, en principio encargadas de hacer frente a la represión policial, emprendieron procesos organizativos autónomos, llegando incluso a llevar vocerías frente a las autoridades públicas y realizando encuentros de carácter regional y nacional, como la Unión de Resistencias de Cali. Solo de manera tardía arribaron a las protestas organizaciones formales de los movimientos sociales, como el Congreso de los Pueblos, el Coordinador Nacional Agrario, la Organización Nacional Indígena de Colombia o la Asamblea Nacional Popular, entre otros. Fue por esa razón que en las regiones los participantes varias veces rechazaron la representación del CNP y de otras organizaciones sectoriales.

Así mismo, tal como había ocurrido con las protestas de 2019 y durante la pandemia, esta gran movilización tampoco consiguió articular un marco de acción colectiva. Las demandas de los manifestantes no se subordinaron a la agenda ni al pliego de peticiones defendido por el CNP. Por esa razón, a las demandas contra la reforma tributaria, la corrupción, las deficiencias de la política gubernamental frente a la crisis pandémica, la incapacidad del gobierno para garantizar la vida de los líderes sociales y los excombatientes, y en favor de la implementación del Acuerdo de Paz, una renta básica universal garantizada por el Estado o el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios o la reforma estructural de la Policía, responsable de la más cruenta represión en la historia reciente del país, se adicionaron cientos de demandas locales y regionales particulares, reivindicadas por grupos de ciudadanos que participaron en las protestas de manera más o menos espontánea. En suma, el extenso número de demandas expresaba un descontento generalizado de la población frente al gobierno y al Estado colombiano, pero no pudo unificarse en un mismo pliego de peticiones ni mucho menos articularse en un marco de acción colectiva.

En suma, las protestas durante el gobierno Duque, a excepción del paro universitario de 2018, no fueron sectoriales sino transversales. Los repertorios de acción convencionales fueron complementados por acciones colectivas innovadoras, la mayoría de las veces convocadas por los mismos ciudadanos participantes. La amplia participación desbordó las organizaciones convocantes en el CNP, cuya representatividad incluso fue cuestionada. Por esa razón, las estructuras de movilización que sustentaron la acción colectiva no estuvieron constituidas por organizaciones formales sino por redes de relaciones sociales de la vida cotidiana, politizadas en las coyunturas de movilización. Debido a la gran acogida de las movilizaciones, las demandas sociales se multiplicaron, de manera que no fue posible construir marcos de acción colectiva comprensivos, capaces de articular la enorme diversidad de reclamos. Aun así, las movilizaciones se caracterizaron por su magnitud, sin parangón en la historia reciente del país, y su persistencia en el tiempo. En este sentido, cabe preguntar: ¿cómo fue posible la acción colectiva en un contexto de desarticulación organizativa y discursiva?

2. El contexto político

Esa pregunta reta el conocimiento actualmente disponible en las teorías de los movimientos sociales. Sin embargo, la respuesta pasa necesariamente por el análisis del contexto político en que se desarrollaron las movilizaciones. Tal escenario se caracteriza por dos grandes procesos que delimitan las oportunidades políticas para la acción colectiva: la ampliación de la agenda pública a consecuencia del proceso de paz entre el gobierno de Santos (2010-2018) y las FARC, que abre oportunidades para posicionar problemas estructurales no resueltos por la sociedad colombiana; y el declive de la hegemonía uribista en la dirección del Estado, que transforma las coaliciones entre actores y las dinámicas de la representación política. Siguiendo a McAdam (1999, pp. 54-55), este contexto puede examinarse en función de tres grandes variables: el grado de represión y criminalización de las protestas; el grado de apertura del sistema político institucionalizado y los problemas de representación política; y la inestabilidad de las coaliciones. A pesar de la altísima represión ejercida por el gobierno Duque, las movilizaciones se desarrollaron porque constituían el único medio a disposición de la ciudadanía para tramitar sus demandas, ante la incapacidad de la izquierda, el “centro” y la derecha para representarlas políticamente.

2.1. Represión y criminalización

Frente a cada una de las movilizaciones, el gobierno nacional implementó unas estrategias invariables. Primero, apostar por su desgaste en el tiempo, difiriendo u obstaculizando los procesos de negociación e interlocución. Segundo, la represión y la criminalización de la protesta fueron constantes en ascenso durante todo el período presidencial de Duque. Ambas estrategias se explican porque el gobierno uribista trató de implementar el mismo marco de sentido previamente exitoso en las dos administraciones de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Duque también trató de fundar su legitimidad en la construcción de un enemigo interno capaz de desempeñar la misma función de las FARC, como antagonista principal de la política de seguridad democrática de su mentor.

Eso explica la reticencia del gobierno a la implementación del Acuerdo de Paz, su impasibilidad frente al asesinato sistemático de más de 500 líderes sociales, el énfasis en una política antidrogas represiva, la intención de marcar un antagonismo con el gobierno de Venezuela y, sobre todo, la represión y la criminalización de la protesta. Para el gobierno, la protesta social siguió viéndose como una amenaza a la seguridad nacional, más que como el ejercicio de un derecho. Los manifestantes, concebidos como “vándalos”, siguieron concibiéndose como actores insurgentes en contra del orden social, no como ciudadanos ejerciendo sus derechos. Por eso, varias veces Duque promovió iniciativas para “regular” el derecho a la protesta, a fin de prohibir

repertorios de acción como los bloqueos a vías principales. De ahí también que el gobierno se negara a dialogar con los actores sociales, dejara plantada la Minga en 2019 y 2020, e incumpliera sus compromisos tras el paro universitario de 2018.

En el fondo, el incremento de la represión en el gobierno Duque se produjo por dos grandes factores. Primero, la doble politización de la fuerza pública. Una politización producto del influjo que en ella ha tenido la Doctrina de Seguridad Nacional, producto del conflicto armado, de acuerdo con la cual la protesta social se concibe y es tratada como una táctica de la insurgencia armada, como expresión del “enemigo interno”. Pero también una politización partidista, debido a la influencia que durante las dos últimas décadas ha tenido el uribismo en la fuerza pública, que en la coyuntura del paro de 2021 se conoció merced a las conferencias que el neonazi chileno Alexis López brindó a los altos mandos militares.

El segundo factor que explica el incremento de la represión es la difusión de un imaginario contrainsurgente, que no ha logrado erosionarse a pesar del Acuerdo de paz, contra la protesta social. Este imaginario, difundido por autoridades públicas como el presidente Duque y la alcaldesa de Bogotá Claudia López en medio de las movilizaciones, se basó en la concepción de los manifestantes como “vándalos”. Este epíteto reemplazó a la insurgencia en la denominación del “enemigo interno” y terminó por legitimar la represión de las protestas, sobre todo porque los “vándalos” se ligaron explícitamente en los discursos del presidente y la alcaldesa a las disidencias de las FARC y a la guerrilla del ELN. El vandalismo se refiere a los daños en bienes materiales, públicos o privados. En medio de las protestas existen afectaciones de distinto orden a este tipo de bienes, por ejemplo, a las paredes en donde se fijan grafitis, a los medios de transporte que se violentan, etc. La mayoría de las veces se trata de hechos aislados, prácticamente ninguna protesta tiene como finalidad dañar bienes. Por lo tanto, el vandalismo puede ser objeto de judicialización individual. La reducción de la protesta social a vandalismo tiene como fin despolitizarla, pues incluso los daños a bienes pueden tener un objetivo político, aun cuando tal finalidad no sea socialmente aceptable. Esa despolitización, a su vez, legitima la represión: los vándalos no están ejerciendo un derecho sino únicamente realizando un daño.

El carácter represivo del gobierno Duque empezó a manifestarse desde el paro universitario de 2018. A las movilizaciones estudiantiles se les dio un tratamiento cuasi bélico, contrarrestadas con todo el poder de fuego del ESMAD. A pesar de la marcada apuesta de las organizaciones estudiantiles por repertorios de acción sin violencia, que retomó repertorios como los abrazos y la entrega de flores a los policías, el paro arrojó una cantidad no determinada de heridos producto de la represión. La policía empezó a usar un repertorio, del que abusaría en las protestas siguientes, consistente en disparar las armas de “letalidad reducida” a los rostros de los manifestantes. Como resultado, por lo menos tres estudiantes perdieron uno de sus ojos. Las marchas fueron abiertamente infiltradas por agentes de policía de civil, lo que confirmó que para el gobierno representaban una amenaza a la seguridad nacional más que el ejercicio de un derecho ciudadano. La retórica contra el “vandalismo” tomó mayor fuerza desde las protestas estudiantiles del 29 de septiembre de 2019. Ese día un grupo de “encapuchados” averió gravemente la sede del Icetex en Bogotá. Estudiantes participantes de la marcha y algunos medios de comunicación informaron que los causantes de los destrozos eran policías “infiltrados”. Nunca se aclaró si realmente fue así, pero tales hechos contribuyeron a fijar en la opinión pública la idea de que las manifestaciones eran “vandálicas”, pese a que en su mayoría se desarrollaron sin violencia. Esa retórica, en la práctica implicaba una criminalización anticipada de la protesta.

Así, aunque las protestas iniciadas el 21 de noviembre de 2019 fueron predominantemente no violentas, la represión fue cruenta, sobre todo sobre el fin de la jornada en Bogotá, cuando la policía empleó la violencia para disolver concentraciones de ciudadanos y marchas en el centro y

sur de la ciudad, atacando indiscriminadamente a los ciudadanos que trataban de retornar a sus viviendas. Esa misma noche, en Cali, el otro núcleo de las movilizaciones, la cruenta represión se acompañó de una crisis de pánico, probablemente orquestada, de acuerdo con la cual grupos de “vándalos” estaban ingresando a los conjuntos residenciales, que terminó por justificar la declaración del toque de queda. Al día siguiente, cuando se repitieron las jornadas de protesta en Bogotá, se implementó la misma medida, difundiendo el rumor de que “vándalos” venezolanos estaban asaltando viviendas privadas, con el fin de desmovilizar a la ciudadanía. El epítome de la represión fue el asesinato del estudiante de secundaria Dilan Cruz, el sábado 23 de noviembre, producto del desalojo violento de una reunión pacífica de ciudadanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá. La magnitud de la represión en esas jornadas motivaría un fallo de la Corte Suprema de Justicia casi un año después, el 22 de septiembre de 2020. El alto Tribunal consideró que la Policía realizó agresiones sistemáticas contra los ciudadanos participantes en las protestas, como la estigmatización, las detenciones arbitrarias, las agresiones fuera de proporción con armas químicas y no letales, entre otras. Por esas razones, ordenó al gobierno ofrecer disculpas públicas por los abusos de la fuerza, amparó el derecho a la protesta ordenando una reestructuración del ejercicio de la fuerza usado para contenerla, y prohibió el uso de la escopeta calibre 12, arma con que fue asesinado Dilan Cruz. La orden de la Corte, sin embargo, no tuvo ningún impacto en la reducción de la represión que, por el contrario, se incrementaría en las protestas siguientes.

La difusión del imaginario contrainsurgente contra la protesta explica también por qué incluso los alcaldes de centro, en ciudades como Cali y Bogotá, epicentros de las grandes movilizaciones, asumieron una política represiva y criminalizante igual a la del gobierno nacional. Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López adoptó el mismo discurso que el presidente Duque. Desde su campaña electoral, se negó a prescindir del ESMAD. En enero de 2020 presentó un protocolo para atender las protestas basado en “madres gestoras de paz”, según el cual un grupo de madres acompañaría las protestas acompañadas de mensajes como “algún día me lo agradecerá”, “soy su mamá y punto”, “cuando tenga hijos se acordará de mí” o “no se dice qué, se dice señora” que fue rechazado en la opinión pública tanto por su ineficacia como por su carácter autoritario. El 16 de enero, sin embargo, se prescindió de esa estrategia y se ordenó al ESMAD reprimir las protestas en la Universidad Nacional. El 21 de enero, cuando se intentó reavivar el paro del 2019, nuevamente hubo represión. Días después, el 5 de febrero, López asoció el vandalismo a las disidencias de las FARC. El 22 de ese mes, el ESMAD reprimió fuertemente protestas en la Universidad Distrital. Cuatro días más tarde, la alcaldesa regañó públicamente al representante estudiantil de esa universidad por denunciar en el Consejo Superior la penetración de dicho cuerpo policial en el campus universitario. Para Claudia López, los responsables del vandalismo eran los estudiantes que protestaban:

Es absolutamente falso que la policía haya entrado a la sede [...] los que están dentro de la universidad, los que salieron y reingresaron a la universidad fueron los vándalos, armados; desde el primer piso y desde la azotea tirando piedras y bombas molotov. ¿Eso no lo vieron los del comité de derechos humanos?⁷

Durante la pandemia igualmente fueron reprimidas las protestas en demanda de ayudas del gobierno para enfrentar el confinamiento. El 18 de abril, en la localidad de Ciudad Bolívar, la policía baleó a Dany Darío Carvajal Castellanos. También se dispararon gases lacrimógenos en el interior de viviendas, afectando adultos mayores y niños. En mayo, aún en medio de la cuarentena, el ESMAD desalojó un terreno de invasión en Altos de la Estancia, en la misma localidad. Sin

⁷ “Qué hay detrás del regaño de la alcaldesa en la Universidad Distrital”. Disponible en: <https://www.eltiempo.com/bogota/que-hay-detras-del-regano-de-la-alcaldesa-claudia-lopez-en-la-universidad-distrital-467128>

embargo, los hechos más graves de represión se produjeron el 9 y 10 de septiembre de 2020. Como documento el periodista Yohir Ackerman, la Policía careció por completo de orden al momento de contener las protestas contra los centros policiales a raíz del asesinato del abogado Ordoñez y atacó a mansalva a los ciudadanos, hiriendo y asesinando con armas de fuego a personas que ni siquiera hacían parte de las protestas. Así mismo, la Policía incurrió en delitos como detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y el sistemático ocultamiento de las identificaciones de los agentes al momento de ejercer la violencia⁸. Como resultado, entre los días 9 y 10 de septiembre hubo 13 ciudadanos asesinados y 305 heridos, 75 de ellos por arma de fuego, según datos que entregó la alcaldesa Claudia López. Aunque la funcionaria afirmó que tuvo el mando todo el tiempo, no explicó quién dio la orden de disparar contra la ciudadanía, ni porqué, aunque los asesinatos se conocieron casi en tiempo real gracias a las redes sociales virtuales, no pudo evitar la masacre. En cambio, la alcaldesa promovió un “acto de perdón y reconciliación”, tan solo cinco días después de ocurrida la masacre, el 13 de septiembre, en el que prácticamente obligó a una parte de las víctimas a perdonar a sus victimarios, lo que puso en evidencia la enorme preocupación de López por su imagen pública antes que por resolver de raíz el problema. Sin embargo, tal actitud contrasta con la del presidente Duque, que se negó a asistir al acto convocado por la alcaldesa para apaciguar los ánimos y, por el contrario, se vistió de policía como un gesto de respaldo incondicional a la institución.

El paro de 2021 fue duramente reprimido y los casos han sido ampliamente documentados. La ONG Indepaz documentó 80 víctimas civiles de violencia homicida en el desarrollo del paro, entre el 28 de abril y el 23 de julio, la mayoría de las cuales tenían como “presuntos victimarios” organismos de la fuerza pública, especialmente de la Policía⁹. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia publicó un informe abarcando desde el 28 de abril hasta el 31 de julio, señalando entre otros abusos de la fuerza y violaciones de los derechos humanos, 63 personas asesinadas, 46 casos verificados de los cuales al menos en 28 casos el perpetrador habría sido un agente de la fuerza pública. Así mismo, documentó denuncias por violencia sexual contra 60 personas, 48 mujeres y 12 hombres, presuntamente cometidas por miembros de la fuerza pública¹⁰. También hubo torturas, desapariciones forzadas, la suspensión de servicios como el Internet y la energía eléctrica en zonas de protesta, entre otros.

Casos emblemáticos de la represión fueron el de Lucas Villa, líder estudiantil asesinado en Pereira el 11 de mayo, y Alison Salazar, una menor que se quitó la vida tras denunciar un abuso sexual por parte de la Policía, en Popayán el 13 de mayo. El repertorio de agresión a los rostros de los manifestantes, sistemáticamente usado por la Policía, arrojó finalmente la escalofriante cifra de 103 personas con lesiones oculares entre el 28 de abril y el 20 de julio, un 14 por ciento de las cuales perdieron por completo el sentido de la visión y otro 14 por ciento que perdieron un ojo, según datos de la ONG Temblores, Amnistía Internacional y la Universidad de Los Andes¹¹.

La represión corrió por cuenta tanto de la policía como de paramilitares urbanos, como los que atacaron la Minga indígena en Cali a principios de mayo de 2021. El gobierno legitimó esa represión y el mismo presidente Duque concibió la protesta como “terrorismo urbano de baja

⁸ “Dios y patria”. Disponible en: <https://www.elespectador.com/opinion/dios-y-patria/>

⁹ “Listado de las 80 víctimas de violencia homicida en el marco del paro nacional al 23 de julio”. Disponible en: <http://indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/>

¹⁰ “El Paro Nacional 2021: Lecciones aprendidas para el ejercicio del derecho de reunión pacífica en Colombia”. Disponible en: <https://www.hchr.org.co/documentos/el-paro-nacional-2021-lecciones-aprendidas-para-el-ejercicio-del-derecho-de-reunion-pacifica-en-colombia/>

¹¹ “Por lo menos 103 personas tuvieron lesiones oculares en paro nacional de 2021”. Disponible en: <https://www.radionacional.co/actualidad/lesiones-oculares-paro-nacional-103-casos-2021>

intensidad”. El 7 y 8 de junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó finalmente una visita a la que el gobierno se había resistido. Cuando presentó su informe, Duque desautorizó a la Comisión afirmando que no podía recomendarle al gobierno colombiano tolerar actos de criminalidad¹². Ese mismo mes el presidente ordenó levantar a la fuerza los bloqueos de vías que aún persistían en ciudades como Cali.

¿Por qué se mantuvieron las movilizaciones, a pesar de la magnitud de la represión? Como se afirmó anteriormente, la dramática crisis social es un factor necesario, aunque insuficiente, explicar por qué las personas decidían correr riesgos y enfrentar los altísimos costos que en este contexto supone la acción colectiva. Otros factores explicativos pueden inferirse de la dinámica política institucional y la dinámica de las coaliciones.

2.2. Política institucional y representación política

La acción colectiva se produce cuando hay cierres en el sistema político institucionalizado para tramitar las demandas sociales. Un sistema totalmente abierto, es decir, capaz de procesar todas las demandas sociales, no genera acción colectiva. Por el contrario, un sistema cuyos procesos de representación política son defectuosos tiende a generar protestas y movilizaciones sociales (Tarrow, 1997, p. 26). Este es el caso de Colombia bajo el gobierno de Duque.

El Acuerdo de paz con las FARC abrió la posibilidad de posicionar en la agenda pública demandas sociales no tramitadas a causa de la guerra. Sin embargo, el sistema político institucional presentó, durante el gobierno de Duque, un cierre frente a esas demandas. El uribismo enfrentaba un lento pero inevitable declive político que se manifestó en la pérdida de aprobación social del gobierno e incluso del expresidente Duque, jefe “natural” de esa colectividad, pero también en los conflictos internos y la paulatina disgregación de sus figuras más relevantes, que buscaron cobijo en otras agrupaciones desde el mismo gobierno de Santos, pasando a engrosar el “centro” e incluso una parte de la izquierda.

No obstante, el gobierno Duque contó durante todo el período con mayorías parlamentarias, las mismas que lo llevaron a la presidencia en 2018. Ante el declive del apoyo social, estas mayorías se sustentaron cada vez más en mecanismos clientelistas, la conocida “mermelada”, eficaz para mantener la cohesión alrededor del gobierno, pero no para representar políticamente las demandas emergentes tras el proceso de paz. En este escenario, lo único que podría afectar la gobernabilidad de Duque era la protesta social, que por su naturaleza quedaba fuera de los circuitos de distribución de la “mermelada”. Esto explica, en parte, por qué se le dio un trato fundamentalmente represivo. Pero también explica por qué la ciudadanía se movilizó a pesar de los altísimos costos de la acción colectiva en términos de represión: no había otra manera de dar trámite a sus demandas.

Aunque producto del declive del uribismo surgió un “centro” político, en la práctica los actores que lo conforman no representaron las demandas sociales que motivaron las movilizaciones. Se trata de personalidades y sectores políticos, provenientes del bipartidismo tradicional, de experiencias políticas como la encabezada por Antanas Mockus y de grupos de izquierda como el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), que han pugnado por construir una identidad política alternativa a la izquierda y a la derecha uribista. Sin embargo, su posición en el continuo ideológico los aproxima más a la derecha que a la izquierda. La etiqueta de “centro” irrumpió en el escenario político durante las elecciones presidenciales de 2018. Su discurso, reivindicado por el candidato Sergio Fajardo, se basó en una falsa equivalencia entre el candidato de izquierda, Gustavo Petro, y el aspirante uribista, Iván Duque, según la cual se trataba

¹² “El duro informe de la CIDH sobre las protestas en Colombia que Iván Duque rechaza”. Disponible en: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57758530>

de dos “extremos” que acabarían con el país al sumirlo en una mayor “polarización”. De hecho, el conjunto de demandas sociales que emergieron con el ciclo de protesta iniciado bajo el gobierno Santos, fueron catalogadas por los políticos de “centro” como demandas extremas y “polarizantes”, lo que implicó su renuncia a representarlas. La campaña de Petro, en contraste, trató de representar esas reivindicaciones, lo que le valió ser anatemizado por sus adversarios como próximo al “castrochavismo” y como alentador del “odio de clases”. Por tales razones, el “centro”, si bien evitó tomar partido en coyunturas álgidas de movilización como el paro de 2021 en favor del gobierno o de los manifestantes, siempre estuvo más cercano al primero. Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López apoyó abiertamente el proyecto de reforma tributaria de Duque, que originó la protesta. Así mismo, la Coalición de la Esperanza, plataforma electoral de “centro”, legitimó el “diálogo nacional”, una táctica con la que Duque pretendió restar legitimidad al CNP y a los manifestantes en esa misma coyuntura, cuando asistió a reuniones con el presidente.

Por otra parte, la izquierda política, pese a las intenciones de muchos de sus actores por representar las demandas sociales emergentes tras el proceso de paz, también presenta una situación problemática que, al menos parcialmente, se lo impide. La desconexión de la izquierda política, representada en partidos como el Polo Democrático Alternativo (PDA) o el movimiento Colombia Humana (CH), entre otros, explica en gran parte el carácter mayoritariamente espontáneo de las movilizaciones, así como su desarticulación discursiva, esto es, la incapacidad para forjar marcos de acción colectiva capaces de vincular la diversidad de demandas sociales. De ahí, por ejemplo, los constantes cuestionamientos que actores organizados en el curso de las movilizaciones mismas, como las Primeras Líneas, hicieron al CNP por su falta de representatividad. De hecho, los llamados “sectores alternativos”, etiqueta que incluyó parte del “centro” y la izquierda, no consiguieron articular un discurso político más allá de su antiuribismo compartido.

Esto evidencia que la izquierda política tiene problemas para construir proyectos capaces de representar las demandas ciudadanas emergentes. Probablemente, esa dificultad también tiene que ver con el desplazamiento hacia el centro del espectro ideológico que las organizaciones antes mencionadas habían experimentado desde 2018, con el fin de captar los votos que les fueron elusivos en las elecciones presidenciales de ese año en el caso de CH y desde un poco antes en el caso del PDA. Esta última organización inicialmente apoyó al candidato presidencial de “centro”, Sergio Fajardo, con lo que en la práctica renunció a representar las reivindicaciones sociales emergentes en esa coyuntura, al participar del discurso contra la “polarización” y el “odio de clases” que supuestamente implicaban. Solo para la segunda vuelta electoral una parte del PDA apoyó la candidatura de izquierda, en cabeza de Gustavo Petro, que explícitamente representaba demandas como la redistribución de la propiedad de la tierra, acabar con el genocidio político como mecanismo de exclusión política o atacar consistentemente la pobreza y la desigualdad, entre otras demandas posicionadas en la agenda pública gracias al proceso de paz. Pero las rivalidades entre los distintos sectores de la izquierda persistieron, obstaculizando la posibilidad de representar el descontento social. Por ejemplo, una vez se produjo la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá, el entonces senador Gustavo Petro públicamente pidió a las centrales obreras que convocaran un paro nacional. El presidente de la CUT, también dirigente del MOIR y del CNP, respondió que las centrales obreras eran autónomas y no se iban a subordinar a un proyecto político, aunque de hecho sus dirigentes pertenezcan a partidos políticos: “cada loro en su estaca”, sentenció.

El PDA continuó su desplazamiento hacia el centro del espectro ideológico en las elecciones locales y regionales de 2019, cuando estableció coaliciones con las candidaturas de “centro” a la alcaldía de Bogotá, con Claudia López, y de Cali, con Jorge Iván Ospina. Sus gobiernos urbanos implementaron las mismas políticas de mercado para atender la crisis sanitaria producto de la pandemia, alentando en primer lugar el “autocuidado” individual, sin ofrecer los

recursos necesarios para atender a los más afectados por la crisis social y por el confinamiento, ni intervenir el sistema de salud privado. No obstante, las coaliciones se mantuvieron incluso tras la masacre del 9 y 10 de septiembre en Bogotá, tras de la cual no se le exigió a la alcaldesa López ni un gesto de responsabilidad política, e incluso después de la cruenta represión del paro de 2021. Únicamente en Cali se rompió la coalición entre el PDA y el alcalde Ospina, probablemente por la presión y la crítica que ejercieron los ciudadanos movilizados contra la administración local.

En fin, el hecho de que los ciudadanos decidieran correr con los riesgos y los costos de la represión, y que de esa manera fuera posible la movilización social, se explica en gran medida porque no había otra manera de tramitar sus demandas. Ni el gobierno ni el “centro” ni la izquierda estaban en condiciones de representar políticamente las demandas que irrumpieron en el escenario político con el proceso de paz. Esto también explica parcialmente la desarticulación organizativa y discursiva que caracterizó las protestas, pese a su magnitud y persistencia en el tiempo.

2.3. Coaliciones

Algunas teorías de los movimientos sociales suponen que la acción colectiva es más probable cuando los ciudadanos descontentos, organizados o espontáneos, cuentan con aliados influyentes en el sistema político (Tarrow, 1997, p. 49). En las grandes movilizaciones bajo el gobierno Duque esta hipótesis solo tiene una comprobación parcial. En verdad, la magnitud y la persistencia de las movilizaciones se explica más bien por las dinámicas que a ellas le imprimió la ausencia de aliados institucionales. La derecha uribista se comportó como un bloque homogéneo en respaldo del gobierno. El “centro” adoptó una posición timorata, evitando tomar partido por el gobierno o por los manifestantes, aunque, en la práctica, los gobiernos urbanos de Bogotá y Cali implementaron las mismas medidas represivas que el gobierno nacional contra las protestas. Una parte de la izquierda, en coalición con el “centro” en los gobiernos locales, desalentó las protestas sociales en tanto que otros actores de izquierda, por razones de principio o por cálculo electoral, respaldaron las protestas.

Duque aprovechó la situación de excepcionalidad de la crisis pandémica para robustecer el respaldo social y político a su gestión por la vía del reparto de recursos públicos, otorgando enormes beneficios al sector financiero y contratando pauta publicitaria con los medios privados de comunicación. Por esa razón, su bancada en el Congreso, los medios de comunicación y los representantes gremiales respaldaron sus medidas contra las protestas. Así mismo, aprobaron en forma unánime la propuesta de reforma tributaria que desencadenó el paro en 2021.

El “centro” y la derecha uribista mantuvieron una disputa, pero las diferencias no fueron tan marcadas como para producir el respaldo de los centristas a las movilizaciones sociales. En “centro” persistió en su política de condena de los “extremos”, con lo que estableció nuevamente una falsa equivalencia entre las protestas sociales y su cruenta represión, y evitó tomar partido. En la práctica, tal actitud terminó por reforzar la criminalización de la protesta, en la medida en que fue coherente con el discurso contrainsurgente que redujo las movilizaciones a “vandalismo”. De ahí que la consigna del “centro” fuese el rechazo a “todas las formas de violencia, vengan de donde vengan”. De esa manera hizo análogas las armas de fuego de la Policía y los paramilitares urbanos con los gritos y las piedras arrojadas por los manifestantes.

La misma conducta siguieron los alcaldes de “centro”, que gobernaron en coalición con parte de la izquierda, en Cali y Bogotá. Por esa razón, su política frente a la protesta fue errática y, en últimas, funcional al gobierno nacional. Por ejemplo, evitaron confrontar al gobierno cuando intentó suplantar las autoridades locales en medio del paro nacional de 2021 (Decreto 575 del 28 de mayo de 2021). Además, ordenaron operaciones represivas, aunque, como en el caso de la alcaldesa López, *a posteriori* descargara toda la responsabilidad por la represión en la Policía.

Finalmente, intentaron adoptar una función como autoridades meramente administrativas, y por tanto subordinadas al gobierno nacional, al que nunca criticaron pese a sus excesos represivos. Incluso el “centro” se caracterizó por su beligerancia contra los sectores de la izquierda que respaldaron las protestas. Por ejemplo, la alcaldesa López acusó a Colombia Humana y a su candidato presidencial, el senador Gustavo Petro, de manipular a los jóvenes y promover la violencia. Especialmente, rechazó como un acto de irresponsabilidad el que uno de los senadores de esa organización, Gustavo Bolívar, dotara con elementos de protección como castos y gafas industriales a los manifestantes de las Primeras Líneas. Por lo demás, López asumió un rol de “tercera parte” supuestamente “neutral” entre la ciudadanía movilizada y el gobierno, proyectando la imagen de que su administración no hacía parte del Estado y la represión era responsabilidad exclusiva de la fuerza pública y del gobierno nacional, aunque contradictoriamente afirmara que siempre había tenido el mando sobre la Policía de Bogotá, como afirmó después de la masacre del 9 y 10 de septiembre de 2020. Así mismo, durante el paro nacional, López asumió el rol de actor no gubernamental, y presentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos un informe en el que, no obstante, resaltaba con mayor ahínco las afectaciones a bienes públicos como el sistema de transporte que la violencia de la fuerza pública contra civiles.

Incluso podría decirse que las coaliciones entre “centro” e izquierda en los gobiernos urbanos no solo no apoyaron la protesta social o contribuyeron a reprimirla, sino que la desincentivaron. La izquierda colombiana se desenvuelve en el ámbito de las organizaciones sociales y políticas, así como en las ONG. Muchas de estas organizaciones fueron cooptadas por las administraciones de las ciudades hasta el punto de que no estimularon la protesta para no afectar la gobernabilidad local. Esta conducta tendría dos consecuencias. Por una parte, el descontento social en ascenso debido a la crisis sanitaria no se expresó en forma de protesta. Así, por ejemplo, el fracaso de la Minga en octubre de 2020, cuando se desplazó desde el Cauca a Bogotá para presionar a Duque a una negociación, se debió en gran parte al interés de la alcaldía de López por conservar su imagen tras la masacre de septiembre del mismo año. De hecho, lo que se produjo fue una cooptación de la movilización, con la alcaldesa participando en algunas de las actividades, pero sin acciones de protesta en estricto sentido. Por otra parte, una vez cooptadas las organizaciones sociales y la izquierda, los gobiernos urbanos de “centro” se privaron de una oposición que, a manera de “termómetro”, les permitiera conocer la magnitud del inconformismo social que finalmente reventó en las movilizaciones. Eso explica el asombro de la alcaldesa López durante el paro de 2021, pues solo mientras se recuperaba de su infección por Covid-19 se enteró de que había un descontento real en las calles.

Corolario

Las grandes movilizaciones sociales durante el gobierno de Duque se inscriben en un ciclo de protesta porque se despliegan en el mismo contexto político, caracterizado por el posicionamiento en la agenda pública de demandas sociales acalladas por la guerra y emergentes a consecuencia del proceso de paz, y el declive de la hegemonía uribista. Sin embargo, no comparten las mismas características. Hasta el paro universitario de 2018, las movilizaciones fueron fundamentalmente sectoriales, apoyadas en organizaciones formales y con marcos de acción colectiva articulados en pliegos de peticiones.

En contraste, desde el paro del 21N (2019), las movilizaciones tuvieron un carácter marcadamente transversal, comprometiendo participaciones masivas, interclasistas, intersectoriales, urbanas y con una gran participación de jóvenes y mujeres. No se apoyaron en organizaciones formales, aunque fueron convocadas por el CNP en su mayoría, sino en estructuras de movilización basadas en redes de relaciones sociales de la vida cotidiana, de amistad, familiares,

vecinales, etc. Empero, a diferencia de las movilizaciones sectoriales, tuvieron grandes dificultades para articular la multiplicidad de demandas de los grupos de ciudadanos que se vincularon de manera espontánea a ellas en marcos de acción colectiva.

La masiva participación en estas movilizaciones, así como su capacidad de persistencia en el tiempo, se ha explicado como resultado de las privaciones impuestas por la crisis socioeconómica y las políticas erráticas del gobierno nacional, especialmente durante la emergencia sanitaria producto de la pandemia. Este es un factor necesario pero insuficiente en la explicación de la acción colectiva, que no debe verse como una reacción espasmódica frente a la crisis, sino que se inscribe en una racionalidad particular en función de las constricciones y oportunidades que brinda el contexto político.

Todas las movilizaciones fueron objeto de una política represiva que se agudizó conforme avanzó el gobierno Duque hasta su epítome en el paro de 2021. A pesar de los costos de acción colectiva que implicaba la represión, la ciudadanía optó por la protesta, fundamentalmente porque no contaba con otra forma de tramitar las demandas sociales acalladas por la guerra que emergieron durante el proceso de paz. Estas reivindicaciones encontraron en el gobierno Duque un contexto poco propicio y un sistema institucional cerrado. El declive de la hegemonía uribista, en particular la caída en la aceptación social de su proyecto político, puso a Duque a depender del clientelismo y el reparto de recursos para asegurar sus mayorías parlamentarias y dejó la protesta social como la única posibilidad de expresar las demandas sociales.

El emergente “centro” político rechazó desde 2018 la posibilidad de representar políticamente tales demandas, al considerarlas expresión de un “extremo” y causantes de “polarización”. Por eso, los actores que lo conforman adoptaron una actitud oportunista frente a las protestas, presentándose al mismo tiempo como neutrales entre el gobierno y los manifestantes, pero apoyando en última instancia la represión y la gestión del primero en cada coyuntura.

La izquierda, a su turno, permaneció dividida y sin posibilidad de darle cauce a esas demandas. De una parte, una gran parte de organizaciones sociales y políticas hicieron coaliciones con los gobiernos de “centro” en ciudades como Cali y Bogotá, lo que las indujo a desincentivar la protesta social para no afectar la gobernabilidad. De otra parte, un sector trató, por principio o por cálculo electoral, de representar esas demandas, pero no tuvo la capacidad para generar un proyecto capaz de articularlas, en parte por su desplazamiento hacia el centro del espectro ideológico en busca de votos. Sin embargo, la victoria electoral de Gustavo Petro en las elecciones presidenciales de 2022 es en parte una traducción inorgánica, es decir, no basada en coaliciones formales entre actores sociales y políticos, del descontento social expresado en las grandes movilizaciones desarrolladas bajo el gobierno Duque.

Referencias bibliográficas

- Archila, M. (2002). Colombia en el cambio de siglo: actores sociales, guerra y política. *Nueva Sociedad*, 182, 76-89.
- Cruz Rodríguez, E. (2012). La Mane y el paro nacional universitario de 2011 en Colombia. *Ciencia Política*, 14, 140-193.
- Cruz Rodríguez, E. (2017) *Caminando la palabra. Movilizaciones sociales en Colombia (2010-2016)*. Desde Abajo.
- Godás I Pérez, X. (2007). *Política del disenso*. Icaria.
- McAdam, D. (1999). Orígenes terminológicos, problemas actuales, futuras líneas de investigación. En D. McAdam, J. McCarthy y M. Zald (Eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas*. Itsmo.
- McAdam, D., McCarthy, J. y Zald, M. (1999). *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales*. Itsmo.
- McAdam, D., Tarrow, S. y Tilly, Ch. (2005). *Dinámica de la contienda política*. Hacer.
- McCarthy, J. D. (1999). Adoptar, adaptar e inventar límites y oportunidades. En D. McAdam, J. D. McCarthy y N. Zald Mayer (Eds.), *Movimientos sociales: perspectivas comparadas. Oportunidades políticas, estructuras de movilización y marcos interpretativos culturales* (pp. 205-220). Itsmo.
- Rivas, A. (1998). El análisis de los marcos: una metodología para el estudio de los movimientos sociales. En P. Ibarra y B. Tejerina (Eds.), *Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural* (pp. 181-215). Trotta.
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Alianza.
- Thompson, E. P. (1995). *Costumbres en común*. Crítica.